

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA

Sala de Decisión Penal

RDO. 21-602T

PRESO: ***NO***

JUZGADO DE ORIGEN: ***OFICINA JUDICIAL***

ENTRA: ***22 DE JUNIO DE 2021***

CLASE: ***ACCIÓN DE TUTELA 1RA INST***

ACCIONANTE: ***MERCEDES PALENCIA DE CALDERON***

CONTRA: ***JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA***

PRIMERA INSTANCIA

Magistrado Ponente

SHIRLE EUGENIA MERCADO LORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha: 22/jun./2021

Página 1

CORPORACION GRUPO SOLICITUDES DE ACCIONES TUTELA PRIMERA INSTANCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA CD. DESP SECUENCIA FECHA DE REPARTO [mm/dd/aa]
REPARTIDO AL DESPACHO 001 16584 22/06/2021 3:08:18PM

SHIRLE EUGENIA MERCADO LORA

IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO	SUJETO PROCES/
28392234	MERCEDES	PALENCIA DE CALDERON	01
SD435805	JUZGADO 1 PENAL MPAL.	FUNC. DE CONOCIMIENTO	02
1102389028	ZAIRA ELIZABET	GARCIA PABON	03
SD435806	TRIBUNAL SUPERIOR	SALA PENAL BUCARAMANGA	02
SD435807	FISCALIA 26 LOCAL	DE JUICIOS	

C21001-SC04X01

CUADERNO

PCrepartO

FOLIOS

EMPLEADO

OBSERVACIONES

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 397543

RV: Generación de Tutela en línea No 397543

Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bucaramanga

<secpenalbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 22/06/2021 16:07

Para: Sandra Yaneth Rivera Solano <sriveras@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (89 KB)

ACTA TUTELA MERCEDES PALENCIA.pdf; CARATULA TUTELA 21-602T.pdf;

Buenos tardes, al despacho acción de tutela de primera instancia. Rad- interno 21-602T, informando una vez revisados los radicadores de la Sala se encontraron las siguientes actuaciones:

R.I. 150A PP. PDO ARCINIEGAS GALVIS RODOLFO POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES CULPOSAS, EN EL CUAL EL 14 DE ABRIL DE 2021 SE DECRETO LA NULIDAD DE LO ACTUADO DESDE EL TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN. REPARTIDO AL DESPACHO DE LA DRA. QUIROZ HERNANDEZ.

Cordialmente;

MICHELL JANIRA GEREDA MENDOZA

Escribiente

Sala Penal- Tribunal Superior de Bucaramanga

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico **secpenalbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co** es de uso único y exclusivo de envío y recibo de comunicaciones judiciales, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: **6520043 Ext. 2100** .

De: Sergio Andres Valderrama Ordoñez <svaldero@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 22 de junio de 2021 3:12 p. m.

Para: Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bucaramanga <secpenalbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: zairaelisabet@hotmail.com <zairaelisabet@hotmail.com>

Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 397543

La Oficina Judicial remite **TUTELA No. 16584**, de primera instancia para su conocimiento.

Atentamente,
Sergio Andrés Valderrama Ordoñez
Oficina judicial - Reparto Bucaramanga

POR FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bucaramanga <apptutelasbga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 22 de junio de 2021 13:31

Para: Sergio Andres Valderrama Ordoñez <svaldero@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Generación de Tutela en línea No 397543

Get [Outlook para Android](#)

From: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co>
Sent: Tuesday, June 22, 2021 12:21:34 PM
To: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bucaramanga <apptutelasbga@cendoj.ramajudicial.gov.co>; zairaelisabet@hotmail.com <zairaelisabet@hotmail.com>
Subject: Generación de Tutela en línea No 397543

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 397543

Departamento: SANTANDER.
Ciudad: BUCARAMANGA

Accionante: ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN Identificado con documento: 1102389028
Correo Electrónico Accionante : zairaelisabet@hotmail.com
Teléfono del accionante : 3195046099

Accionado/s:
Persona Jurídico: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA DE DECISIÓN PENAL - Nit: ,
Correo Electrónico: secpenalbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: FISCALÍA 26 LOCAL DE JUICIOS- Nit: ,
Correo Electrónico: lucy.caballerosanto@fiscalia.gov.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO

Derechos:
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:

[Archivo](#)

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:

Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



SEÑOR:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENA
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA.

ACCIONANTE: MERCEDES PLENCIA DE CALDERÓN.

ACCIONADO: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA y otros.

ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.390.028 de Piedecuesta, Santander, estudiante activa y certificada por el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander con Código Universitario No. 2162859, obrando como apoderada de la señora **MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN** dentro del proceso referenciado, me dirijo respetuosamente a su despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** contra el **JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA, TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA DE DECISIÓN PENAL** y la **FISCALÍA 26 LOCAL DE JUICIOS/ LUCY AZUCENA CABALLERO SANTOS (Fiscal encargada)**, a fin de obtener protección inmediata frente a los derecho fundamental de igualdad, debido proceso y demás derechos de las victimas dentro del proceso penal. Fundamento esta acción en los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO: El 11 de diciembre de 2020 la Fiscalía 26 Local de Juicios envía solicitud al Consultorio Jurídico UIS para que designe apoderado de víctima para representar a la señora **Mercedes Palencia de Calderón**, esto con el objeto de asistir a la audiencia de juicio oral programada para el día 25 de enero de 2021 dentro del proceso penal por el delito de lesiones personales dolosas en contra de **Rodolfo Arciniegas Galvis**, radicado con el No. 680016000159201381439 que se adelanta ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento.

SEGUNDO: El 11 de diciembre el Consultorio Jurídico UIS fui designada como apoderado de víctima para asistir a la señora **Mercedes Palencia de Calderón**.

TERCERO: El 21 de enero de 2021 a través de memorial y certificado de estudiante activo me presente ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, solicitando me concedieran personería jurídica para actuar como representante de victima dentro del proceso penal con radicado No. 680016000159201381439.



CUARTO: El día 04 de febrero de 2021 a través de correo electrónico recibí traslado del fallo donde se condenó al señor Rodolfo Arciniegas Galvis por la comisión del punible de lesiones personales culposas dentro del proceso con radicado No. 680016000159201381439.

QUINTO: En ningún momento se me notificó de apelación por parte de la defensa del señor Rodolfo Arciniegas Galvis, generando una falsa expectativa para esta representación de víctima toda vez que se inició a tramitar el respectivo incidente de reparación integral y se allegó copia de este al juzgado, vulnerando así el debido proceso y todos los derechos de la víctima, la señora Mercedes Palencia de Calderón.

SEXTO: El martes 20 de abril recibo citación para audiencia de lectura de fallo de segunda instancia. En dicho fallo se decreta una nulidad de la actuación procesal, a partir –inclusive– del traslado del escrito de acusación, con el fin de que se retrotraiga el trámite y se adopte la decisión que corresponda, en los términos indicados en la sentencia. Demostrando un error por parte de la fiscalía encargada desde la realización misma del escrito de acusación, generando una dilación en el proceso e irrumpiendo con los derechos de justicia, verdad y reparación de la víctima.

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos descritos, solicito comedidamente declarar mediante sentencia vulnerados los derechos al *debido proceso*, *igualdad*, *verdad*, *justicia*, *reparación* y demás derechos inherentes a la víctima la señora **Mercedes Palencia de Calderón**, y en consecuencia disponer y ordenar lo siguiente:

PRIMERO: Que se tutelen dos derechos fundamentales de la señora Mercedes Palencia de Calderón, al debido proceso, la igualdad, dignidad humana, justicia, reparación, verdad, defensa, actuación procesal y demás derechos de las víctimas que se han visto vulnerados con la falta de notificación y demás actuaciones procesales por parte de la fiscalía.

SEGUNDO: Que se declare nula la sentencia de segunda instancia proferida por el **Tribunal Superior De Bucaramanga Sala De Decisión Penal**, toda vez que no se me notificó el recurso de apelación presentado por la defensa señor Rodolfo Arciniegas Galvis y no pude manifestarme como recurrente ante el mismo.

TERCERO: Que se ordene el traslado del escrito de apelación presentado por la defensa del señor Rodolfo Arciniegas Galvis ante el **Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga**, para realizar la debida pronunciación por parte de esta representación de víctima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y el respeto hacia el debido proceso dentro de toda actuación judicial o extrajudicial. En ese sentido, como lo afirma el autor Nelson Saray Botero:

“Es indiscutible que los derechos de las víctimas adquieren un rango constitucional pues son un sujeto procesal que merece especial consideración en el conflicto penal y se erige así en factor determinante en los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz social”.¹

Esa consagración constitucional de la víctima como elemento constitutivo del sistema penal debe darse en armonía con los paradigmas provenientes del derecho internacional tales como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. En esa búsqueda integradora nace la **tutela jurisdiccional efectiva**, como un sistema de garantías que pretende otorgarle a la víctima y al acusado acceso a la justicia, la igualdad, defensa dentro del proceso, imparcialidad e independencia y la efectividad misma de tales derechos².

Por tal razón, **la víctima tiene derecho a intervenir en todas las fases de la actuación procesal**, dicha “intromisión” **es una garantía fundamental a los derechos de verdad, justicia y reparación**. Es necesario mencionar, que solo cuando tales garantías son satisfechas a la víctima ya no le asiste un interés jurídico, cosa que para el caso concreto después de muchos años de proceso no ha sido dada.

Ahora bien, entrando en materia procesal penal el Maestro Espitia Fernández señala que:

“Toda decisión debe ser notificada y a ante la misma proceden diversos medio de impugnación regulares, tales como, apelación, reposición y queja³, que atienden a obtener su revocatoria, aclaración, modificación o adición, que se denominan recursos y deben interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la última notificación”.

La sentencia C-648 de 2001 también menciona la importancia de la notificación dentro del proceso penal, ya que esta *“tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso”*. Para el caso concreto se entiende que es un

¹ Saray Botero, Nelson. (2017). *Procedimiento penal acusatorio (Imputación, acusación, preparatoria, juicio oral, procedimiento especial abreviado y acusador privado)*. 2ª Ed. Bogotá: Leyer Editores.

² Ibidem.

³ Espitia Garzón, Fabio. (2003). *Instituciones del derecho procesal penal*. 4ª Bogotá: Legis Editores.



derecho fundamental el hacer uso de la impugnación a través de la apelación de sentencia por parte de la defensa del señor Rodolfo Arciniegas Galvis, el problema jurídico es que la falta de notificación de tal recurso genero un daño real en la víctima; pues ante ese silencio esta representación procedió a realizar el respectivo incidente de reparación con la esperanza de una “reparación” justa que le permitiera a la señora Mercedes Palencia de Calderón acceder a esas garantías fundamentales de **verdad, justicia y reparación**.

Pero más allá de esa “reparación”, se vieron afectados los derechos fundamentales de la víctima como lo son el acceso a la justicia, la igualdad, la administración de justicia, debido proceso etc. Eso sin mencionar que la prescripción de la acción penal es casi inminente.

Por eso acudo a este honorable tribunal en busca de respuestas que puedan solucionar y de alguna manera disminuir el daño que en un primer momento fue causado hacia la víctima a través de la comisión de una conducta dolosa de lesiones personales.

JURAMENTO ESTIMATORIO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he instaurado otra tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos materia de esta acción según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

PRUEBAS:

Solicito se tenga como pruebas los siguientes anexos aportados con esta comunicación.

ANEXOS

- Solicitud designación representante de víctima de la Fiscalía 26 Local de Juicios del municipio de Bucaramanga, al consultorio jurídico UIS.
- Certificado de estudiante activo consultorio jurídico UIS.
- Poder otorgado por la víctima.
- Sentencia de primer instancia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga.
- Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga Sala de Decisión Penal.



NOTIFICACIONES

ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN

Dirección: Cra. 3#11-30 Barrio Arguaney; Arauquita, Arauca.

Teléfono: 3195046099

Correo Electrónico: zairaelisabet@hotmail.com

MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN.

Dirección: CRA. 9 OCC. 36-82 Barrio la Joya; Bucaramanga, Santander.

Teléfono: 3124855750- 3104734680.

Del señor Juez, Atentamente:

ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN


C.C. No. 1.102.389.028 de Piedecuesta, Santander.

C.U. 216285

MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN

C. C. No. 28.392.234



	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-47
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Versión: 01 Página: 1 de 1

Bucaramanga, 11 de diciembre de 2020
Oficio 074 – Fiscalía 26 Local de Juicios

Señores
CONSULTORIO JURÍDICO UIS
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: CUI. 680016000159201381439 (1187)


Respetados Señores.

Comendidamente le solicito se sirva designar un **apoderado de víctima** para asistir a la señora **MERCEDES PALENCIA DE CALDERON, c.c. 28.392.234, TI. 3124855750, 3104734680**, en las audiencias virtual de juicio oral, donde deberá contarse con apoderado de víctima de persona mayor edad, ante el Juzgado primero (1) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento correo: j01pmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co ubicado en la **calle 34 # 11 -22 Palacio de Justicia de Bucaramanga**, despacho a quien se debe presentar el poder para su reconocimiento, en el desarrollo del proceso de la referencia, por el delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS** que se adelanta contra **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**.

Audiencia para traslado de fallo el día 25 de enero de 2021 a las 08:00 am.

Fiscal a cargo: LUCY AZUCENA CABALLERO SANTOS

Cordialmente,

Firma: 
Nombre de Servidor que cita: **ALIRIO HERRERA HERRERA**
Correo: Alirio.herrera@fiscalia.gov.co
Cargo: **ASISTENTE DE FISCALIA 26 LOCAL DE JUICIOS**
Dirección: **Carrera 11 # 41 – 13 piso 2 Bucaramanga**
Teléfono: **6854566 ext. 73620 -3188243024**



No. 65083

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL CONSULTORIO JURÍDICO
DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Aprobado mediante Acuerdo No. 00030 de 1999
expedido por el Tribunal Superior de Bucaramanga,

CERTIFICA:

Que ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 1.102.389.028 expedida en Piedecuesta, Santander, Código Universitario 2162859, es estudiante de último año de la Carrera de Derecho en la Universidad Industrial de Santander y en la actualidad se encuentra realizando la práctica de Consultorio Jurídico III, por ende queda autorizado(a) para asumir como REPRESENTANTE DE VÍCTIMA DE LA SEÑORA MERCEDES PALENCIA DE CALDERON DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES QUE SE ADELANTA ANTE EL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA, radicado bajo el número 68001-6000-159-2013-81439-00.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de diciembre del 2020.

CLARA INES TAPIAS PADILLA
Director



SEÑOR:

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE
BUCARAMANGA

E. S. D

RADICADO: 680016000159201381439.

DELITO: LEISIONES PERSONALES DOLOSAS.

QUERELLANTE: MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN.

QUERELLADO: RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS.

REFERENCIA: PODER.

MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN, en mi calidad de **QUERELLANTE** dentro del proceso de la referencia, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.392.234; otorgo PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a **ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN**, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.390.028 de Piedecuesta, Santander, con correo electrónico: zairaelisabet@hotmail.com, y portador de Código Universitario No. 2162859 para que en adelante funja como **REPRESENTANTE DE VICTIMA** dentro del proceso referido.

Mi apoderada queda investida de las facultades de que tratan los artículos 74 y 77 del Código General del Proceso; sin embargo, le queda expresamente prohibido hacer uso de la facultad de recibir.

Atentamente,

MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN

C. C. No. 28.392.234

Tel. 3124855750

Acepto

ZAIRA ELISABET GARCÍA PABÓN

C.C. No. 1.102.389.028 de Piedecuesta, Santander.

C.U. 2162859



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SGC

*Consejo Superior de la Judicatura
Juzgados de Bucaramanga Pertenecientes al Sistema Penal Acusatorio*

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

Bucaramanga, tres (03) de febrero de dos mil Veintiuno (2021)

ASUNTO

Celebrado el juicio oral y declarada la responsabilidad penal de **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**, por el reato de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS** en perjuicio de Mercedes Palencia de Calderón y al no avizorarse causal que nulita lo actuado, este operador judicial entrará a proferir sentencia al considerarse válida la actuación, teniendo como marco previo las formalidades del artículo 162 del C.P.P.

SITUACIÓN FÁCTICA

Noticia el diligenciamiento que el 20 de octubre de 2013, aproximadamente las diez y treinta y cinco minutos de la mañana, en momentos en que la señora Mercedes Palencia de Calderón se encontraba sobre el separador cruzar la carrera 17 con calle 45 de esta ciudad, a la espera que cambiara el semáforo, fue arrollada por la motocicleta de placas VWR 98C, conducida por el señor **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**, quien se desplazaba por dicha arteria vial en sentido occidente-oriente, como que enredó con el bolso de la dama. A la víctima se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de 60 días y como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente.

IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DEL SENTENCIADO

RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 91.540.303 expedida en Bucaramanga, ciudad donde nació el 11 de junio de 1985, hijo de Rodolfo y Diocelina, trabaja en oficios varios y residente en la Calle 73 No. 28 – 29 del Barrio San Pedro de Bucaramanga.

ACTUACIÓN PROCESAL

La presente actuación se tramitó bajo los parámetros contenidos en la Leyes 906 de 2004 y 1826 de 2017, normativa última a través de la cual se introdujo el procedimiento especial abreviado allí previsto. Fue así como la Fiscalía 30 Local de Bucaramanga Delegada ante estos Juzgados, el **18 de Abril de 2018** corrió **Traslado de Acusación** en contra de **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**, como autor responsable del delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS**, en perjuicio de Mercedes Palencia de Calderón, conducta

descrita en el libro II, Título I delitos contra la vida y la integridad persona, en el capítulo III en los artículos 111, 112 inciso segundo, 113 inciso segundo y 114 inciso segundo, en concordancia con el art. 117 y 120 inciso primero y segundo del C. Penal, cargos que no fueron aceptados.

Habiéndose asignado a este Juzgado el conocimiento de la actuación, el 5 de marzo de 2019 se materializó la audiencia Concentrada, dejándose fijadas e forma clara las reglas de cara al Juicio Oral y público, el cual se llevó a cabo en sesiones del 8 de mayo y 10 de Julio de 2019, 11 de marzo y diciembre de 2020, en donde luego de escuchar las alegaciones finales de las partes en contienda, se emitió un sentido del fallo de carácter condenatorio.

ALEGACIONES FINALES PRESENTADAS POR LOS PARTES E INTERVINIENTES

La **agencia fiscal** centró sus planteamientos a demandar una sentencia de condena en contra del acusado En efecto, luego de escenificar el sitio de los hechos, correspondiente a la calle 45 con carrera 17 de esta ciudad, se ocupó de referir que no por el insular hecho que la víctima sea una adulta mayor, tal como lo anunció desde la teoría del caso, debe relevarse de responsabilidad al acusado, de quien afirmó violó el deber objetivo de cuidado que le era exigible en su condición de conductor de una motocicleta.

Seguidamente, se adentró en referir y analizar cada uno de los testimonios acopiados en desarrollo del debate oral, comenzando por el de la víctima **Mercedes Palencia de Calderón**, deduciendo que de su versión se deduce que el motociclista la arrolló cuando ella se encontraba sobre el separador de la citada arteria vial, dispuesta a avanzar sobre la cebra allí existente, enredándola por su bolso en ese escenario en la que la velocidad permitida es la de 30 km x h.

Del testimonio del perito forense, doctora Diana Margarita Melo, dijo que con ella acreditó la materialidad de la infracción, como que le determinó a la víctima una incapacidad definitiva de 60 días y como secuela una deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente.

Respecto del testigo **JORGE ELIECER CRUZ GUEVARA**, sostuvo que con él acreditó e incorporó la experticia que practicó a la motocicleta que conducía el acusado, precisando los daños que el experto encontró en dicho rodante, para enfatizar que esos daños son dicientes de la velocidad con la que transitaba el acusado, quien precisamente no lo hacía a la defensiva.

En relación con el testimonio de EDGAR NOVA LAYTON, con quien incorporó el informe relacionado con la inspección y análisis al sitio de los hechos, dijo que fue claro en señalar que el factor determinante del suceso fue la falta de atención del motociclista en desarrollo de la actividad peligrosa que adelantaba, advirtiendo que el SOAT que exhibió estaba vencido. Agregó que este testigo recreó el sitio de los hechos y la forma como se escenificó el siniestro, acudiendo para tal efecto a imágenes tomadas al lugar, precisando que este testigo indicó que de haber marchado el acusado a una velocidad permitida, no habría

generado el percance, motivo por el que no alcanzó a maniobrar el aparato en el que se movilizaba, a tal punto que no existió huella de frenada, aunque sí de arrastre metálico de la motocicleta por un espacio de 2.80 metros, indicativo ello de la velocidad con la que se desplazaba el infractor.

Asimismo, la fiscal sostuvo que este deponente no se casó con la hipótesis 409 planteada por el agente de tránsito Fredy Murillo, dada la ausencia de soporte probatorio, reiterando que el acusado fue el factor determinante del accidente por no haber contado con la debida atención que le era exigible en ese preciso instante.

Finalmente, señaló que el acusado se mantuvo ajeno al trámite surtido en el proceso, a tal punto que dejó huérfana a la defensa en el juicio oral, insistiendo en la emisión de un sentido de fallo de condena por la desatención con la que ejercía la actividad de conducción de motocicleta. En su réplica, criticó que la defensa haya puesto en tela de juicio el dicho de la víctima que no tenía por qué conocer al acusado, lo cual en manera alguna resta credibilidad, y que el perito de tránsito no tiene por qué tener conocimiento de medicina y que la defensa de la época lo que no entendió es que el perito debía analizar los elementos de la carpeta penal y practicar la inspección al sitio de los hechos. Además, indicó que el intendente fue claro en sostener la situación que se puede desprender de las indicaciones de un semáforo, recalcándolo que la víctima sí dijo que estaba en el separador esperando el cambio del semáforo, agregando, por otro lado, que lo que hizo el perito fue análisis y no valoraciones

A su vez la **defensa**, se permitió advertir que con los elementos materiales probatorios no se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del encartado, puesto que de la propia narración de la víctima se advierte su falta de claridad, contradicciones, sin poder identificar al encartado, donde tampoco pudo advertir si se encontraba cruzando la vía o no, o si estaba sobre el andén o si el semáforo estaba en luz roja o verde. Cuestionó, en igual sentido, el testimonio de Edgar Nova bajo el entendido que se extralimitó en sus funciones puesto que estableció unas causas determinantes y contribuyentes del accidente, haciendo juicios valorativos de los elementos materiales probatorios mencionando sobre temas de la responsabilidad que sólo atañen al Juez, además de emitir juicios de tipo médico, dejando de lado la normatividad de tránsito y la autopuesta en peligro de la víctima que fue lo que originó el accidente de tránsito.

Advirtió que la agencia fiscal no logró desvirtuar la presunción de inocencia, donde se asomó una falta al deber de cuidado de la víctima, además de no establecerse en qué luz estaba el semáforo cuando transitaba la motocicleta conducida por el encartado, en el que resaltó además los pronunciamientos por parte del órgano límite en materia penal frente a la autopuesta en peligro de la víctima por lo que culminó su intervención reclamando una sentencia absolutoria.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es necesario indicar que el presente asunto se tramitó el Juicio Oral en su primera en presencia de otro funcionario judicial. Por tal motivo es dable recordar la

existencia de elementos tecnológicos, esto es, audios y vídeos, que permitieron el acceso directo lo sucedido en desarrollo del juicio oral. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en casos como el de marras, indicando que, si bien, el principio de inmediación no se observa a cabalidad –comoquiera que han sido varios funcionarios judiciales los que han tenido conocimiento de la presente actuación-, con ello no se logra causar perjuicio alguno, siempre que se respeten los derechos y garantías fundamentales que le asisten a las partes y se mantengan los cimientos básicos del proceso penal, para lo cual basta con hacer notar que como este operador judicial se encuentra de acuerdo con el sentido de fallo emitido, sería inane decretar la nulidad de la actuación, lo cual constituye un remedio extremo y se debería acreditar los reales defectos sustanciales que no puedan ser subsanados de otra manera.¹

1.- Problema jurídico:

¿Le es imputable objetivamente a **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS** el resultado de lesiones causadas en perjuicio de la integridad física de Mercedes Palencia de Calderón, por los hechos ocurridos en Bucaramanga el 20 de octubre de 2013, y si por tanto debe condenársele como autor del delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS**?

La respuesta al problema jurídico fue resuelta de manera **positiva**, como se concluyera en la audiencia de Juicio Oral, donde luego de analizarse el acervo probatorio arrimado y la intervención de las partes, se anunció un sentido de fallo condenatorio.

2.- Normatividad aplicable:

- a. Artículos 111, 112 inciso segundo, 113 inciso segundo y 114 inciso segundo en concordancia con los artículos 117 y 120 inciso primero y segundo del Código Penal:

“ART. 111 LESIONES- El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes”.

“Art. 112 Incapacidad para trabajar o enfermedad... ... inciso segundo.... Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

“Art. 113 Deformidad. ... inciso segundo ... Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

“Art. 114 Perturbación Funcional. ... inciso segundo... Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Artículo 117. Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.”

¹ Así, el principio de inmediación y concentración no pueden considerarse como absolutos, pues en cada evento deben ponderarse los efectos del ámbito de protección al procesado, las víctimas y los terceros que resulten involucrados. Cfr. Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 44792 del 16 de abril de 2015

“Artículo 120- Lesiones culposas- El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.”

3.- Estipulaciones probatorias.

Previo al estudio del material probatorio, se debe precisar que, por haber mediado la estipulación probatoria, no fueron objeto de contradicción (i) la plena identidad del acusado.

La Fiscalía General de la nación elevó cargos contra **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**, como coautor y responsable del delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS**, , conducta descrita en el libro II, Título I delitos contra la vida y la integridad personal, en el capítulo III en los artículos 111, 112 inciso segundo, 113 inciso segundo y 114 inciso segundo, en concordancia con el art. 117 y 120 inciso primero y segundo del C.P., al haberse establecido que **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**, causó daño en el cuerpo de **Mercedes Palencia de Calderón**, sin justa causa, a quien se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de definitiva de 60 días y como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación del órgano de locomoción de carácter permanente.

4. Probanzas

Para soportar los lineamientos que llevaron a erigir un sentido de fallo condenatorio este Juzgador se permite abordar como primera medida, la materialidad de la infracción, es decir, las lesiones sufridas por la víctima, para entrar en un segundo tópico a estudiar cada uno de los testimonios vertidos en Juicio Oral, donde se recalaran cada uno de ellos los aspectos relevantes, para finalmente aterrizar al estudio de la Teoría de la Imputación Objetiva y concluir que las lesiones sufridas por la víctima se pueden atribuir al actuar de **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS**.

El artículo 9 del Código Penal, establece que para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, pues la causalidad por si sola no basta para la imputación jurídica del resultado. A su vez, el art. 23 del C.P. refiere que *“la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, ó habiéndolo previsto confió en poder evitarlo”*.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia bajo el Radicado No. 27537 del 22 de mayo de 2008, en la doctrina penal contemporánea, considera que la realización del tipo objetivo en el delito imprudente (o, mejor dicho, la infracción al deber de cuidado) se satisface con la *teoría de la imputación objetiva*, de acuerdo con la cual un hecho causado por el agente le es jurídicamente atribuible a él si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el *riesgo permitido* y dicho peligro se realiza en el resultado concreto.

Para soportar su teoría del caso, la agencia fiscal presentó como testigo a la víctima **Mercedes Palencia de Calderón**, quien refirió al estrado no recordar de manera exacta la fecha de los hechos ni el nombre de la persona denunciada, advirtiendo que el accidente fue en la carrera 17 con calle 45 de esta ciudad, indicando que el acusado la atropelló y que cuando fue a verla a la clínica le dijo que sólo había tenido un rasguño, pidiéndole que firmara un papel, al cual ella accedió, desconociendo el contenido del mismo, del que se pudo enterar era para tramitar la devolución de su motocicleta

Expuso que el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:35 a.m., desplazándose ella a pie por la carrera 17 hacia donde su hijo, luego de salir del templo que vive, ubicado en inmediaciones de la calle 45. Indicó que la persona que la atropelló transitaba por la calle 45 en una motocicleta, explicando que ella estaba esperando, sobre el separador, que cambiara el semáforo para poder cruzar y en ese momento fue arrollada por el motociclista, mientras ella estaba parada en la esquina de la carrera 17, siendo arrastrada por la carretera.

Aclaró que fue arrastrada de un lado a otro de la calle 45, quedando el acusado con su bolso, dejando ver además que conocía el lugar del accidente puesto transitaba por allí todos los días. En cuanto a las lesiones padecidas informó que lo recibió las mismas en su pierna izquierda y en su brazo, también en los riñones, donde tuvo que recibir dos operaciones

Enunció que el día del accidente iba sola y su hija la auxilió llevando a la Clínica, que nació el 7 de enero de 1939.

En cuanto al accidente aclaró respecto a la ocurrencia de si estaba parada en el andén o cruzando la vía expuso que sólo estaba dando el primer paso sobre la vía cuando fue arrollada por el motociclista.

En contrainterrogatorio manifestó que el semáforo se encontraba en luz roja sino no hubiera procedido a cruzar la vía, recordando igualmente que para la fecha del accidente contaba con 75 años de edad.

Dejó ver que antes de cruzar los carros estaban detenidos y que siempre respetan, culminando por advertir que no conoce al acusado y no sabe dónde viva.

Igualmente compareció al debate oral la Dra. **Diana Margarita Melo**, galena adscrita al instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien valoró a la víctima Mercedes Palencia de Calderón, por lo que teniendo de presente 2 dictámenes médico legales del 5 de noviembre de 2013 y 12 de febrero de 2014, manifestó que ella realizó el último informe en el que previa descripción de los hallazgos en la paciente, determinó una incapacidad médico legal definitiva de 60 días y como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación del órgano de locomoción de carácter permanente.

En igual sentido desfiló en el Juicio Oral **Edgar Guerrero Melo**, perito experto en automotores de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien tuvo a su cargo realizar inspección a la motocicleta de placas VWL 9C, dejando ver la descripción de daños que sufrió ese rodante en los manubrios, defensa, rin delantero y espejos. En cuanto a sus sistemas refirió que los frenos y llantas se encontraban en buen estado.

Al debate oral compareció **Edgar Nova Layton**, técnico en seguridad vial, Intendente de la Policía Nacional, quien luego de ilustrar sus funciones al estrado, dijo que realizó un informe de reconstrucción de accidente de tránsito, calendado al 2 de abril de 2018, el cual reconoció, y refiriendo que se reconstruyó accidente de tránsito acaecido el 20 de Octubre de 2013, el cual fue tipo atropello acaecido sobre la calle 45 con carrera 17 de esta ciudad, del que indicó no existían elementos que impidieran la visibilidad en la intercepción.

Adujo que en el accidente se involucró la motocicleta tripulada por el acusado, quien transitaba por la Calle 45 occidente- oriente y la víctima en calidad de peatón sobre la Carrera 17 sentido norte-sur. Relató que sobre la intercepción existen semáforos, separador, paso peatones y prohibido estacionar.

Expuso que tomando que el informe de accidente tránsito se realizó una ambientación en un programa informático, donde además el agente de tránsito consignó como hipótesis del accidente que el peatón cruzó sin observar. Indicó, en igual sentido, que en dicho sector no existe prelación del peatón.

Esgrimió que existe un factor determinante y un factor contribuyente. El primero de ellos atribuido al motociclista por la demora en la percepción del riesgo al no reducir su velocidad al notar la presencia del peatón en la vía, lo cual también se deduce de la ausencia de huella de frenada, existiendo sí una huella de arrastre aproximadamente de 3 metros.

Como factor contribuyente del accidente advirtió que el peatón no tuvo la precaución adecuada al momento de cruzar la vía, quien debía ir acompañada por una persona mayor de 16 años dada su edad, tal y como lo esgrime el Código Nacional de Tránsito.

En contrainterrogatorio manifestó que valoró los elementos materiales probatorios, aclarando además que las precauciones no son de las señales de tránsito sino son las precauciones de la vía.

En igual sentido, informó que se tuvieron en cuenta factores como la trayectoria, evidencias y demás elementos para no dar prelación a lo manifestó por parte del agente de tránsito.

Son estas breves consideraciones, las que, de forma diáfana y clara sin mayores dificultades, obtenidas del análisis y valoración del material probatorio vertido en el juicio oral, que permiten concluir que el encartado, en su actividad de conductor de una motocicleta, faltó al deber objetivo de cuidado, al no realizar la maniobra tendiente a evitar atropellar a la víctima en inmediaciones de la calle 45 con carrera 17 de la ciudad de Bucaramanga, como que estado

ella sobre el separador de la avenida, enganchó su bolso con la motocicleta, generando el suceso conocido.

Ahora bien, de las premisas jurídicas y fácticas expuestas, se tiene que, frente a la creación de un riesgo no permitido, tenemos que, a luz de la teoría de la imputación objetiva, la actividad desplegada por el aquí conductor, se encuentra entre aquellas, que han sido consideradas como de suyo peligrosas, pero jurídicamente permitidas, como lo es la actividad de la conducción, la cual se rige por la observancia del Código de Tránsito.

Pero igualmente, se señala que, entre otros, se crea un riesgo jurídicamente desaprobado cuando concurre el fenómeno de la elevación del riesgo, que se presenta *“cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jurídica y socialmente, así como cuando, tras sobrepasar el límite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causación de daño”*².

Frente a este aspecto, se debe hacer alusión a la violación al deber objetivo del cuidado, debiendo remitirse a las fuentes que sirven de directrices para establecer si se configura o no el elemento en examen, desarrolladas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y que se resumen en las siguientes:

“...El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.

*“...El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos”*³.

Examinada la actuación, se tiene que en efecto el acusado tal y como lo dejan ver las pruebas, quien transitaba por una arteria recta, omitió disminuir su velocidad o realizar la maniobra tendiente a esquivar a la víctima que se hallaba sobre el separador, donde si bien es cierto, se infiere igualmente que la víctima pudo no haber sido cautelosa al momento de pretender cruzar la vía, pues en el plano real es imposible que *“la motocicleta hubiese salido de la nada”*, ello no corta de tajo la responsabilidad penal en que puede incurrir alguna persona, en este caso el acusado, ya que conforme el estado de la vía la cual deviene de una línea recta el encartado **tuvo toda la visibilidad y panorámica de percatarse de la presencia de cualquier obstáculo en la vía**, por lo cual una eventual falta de previsión de la víctima no pueden **zafar** la responsabilidad penal, ya al ser la conducción una actividad riesgosa, ante la situación de los peatones en la vía el encartado debió guardar el deber objetivo de cuidado, además que por estar en una intersección su velocidad debía reducirse a 30 km/h, precisamente límites que se fijan por parte del Estado para que, ante imprevistos, quien tripula

² Sentencia de 7 de diciembre de 2005, radicación 24696.

³ Cfr. Sentencia de 24 de octubre de 2007. Radicación N° 27325.

un vehículo pueda maniobrar el mismo, por lo que ello incidió en el resultado que se tradujo en las lesiones padecidas por la víctima.

Sin ir lejos, en la ilustración de la Teoría de la Imputación Objetiva, si una persona que lleva la vía observa una persona parada sobre la calzada, no por llevar la vía puede proceder a arrollar la misma, de hecho, si se fuera exigente, ello inclusive podría incluso ubicarle en el sendero del dolo eventual del cual en plena garantía del encartado no se discutirá dicha situación.

En este sentido, es clara la presente operador en advertir que la obligación del deber de cuidado no es solamente de la víctima, debiendo tener el cuidado suficiente al cruzar la calle, pues de sus manifestaciones se advierte esa circunstancia; no obstante esa situación, no por ello se deduce su culpa en el accidente ocurrido, ya que en el estudio en sede de imputación objetiva se deben cumplir los derroteros para establecer en cabeza de quién recae las lesiones que padece la hoy víctima; se advierte que pese a una falta de cuidado del afectado (puesto que los medios de prueba así lo dejan ver, pues estando la víctima sobre el separador, ello no es un escollo para no poder edificar la responsabilidad penal en cabeza del acusado, indicando desde ya por parte de este despacho judicial que el encartado faltó al deber objetivo de cuidado, porque así lo dejaron ver los medios de prueba incorporados como prueba al Juicio Oral, los testimonios donde la parte defensa se quedó corta y **no arrimó un solo medio de prueba**, y al respecto se acota una postura tajante desde el verdadero sentido y alcance que se debe hacer a la luz de la Teoría de la Imputación Objetiva con el que se debe dirimir cada caso concreto, puesto que de forma errónea se piensa que al existir un actuar imprudente o transgredirse una norma por parte de la víctima (como lo pregona la defensa y centra su defensa en una autopuesta en peligro de la víctima), ya con ello no resquebraja o corta de tajo que se pueda enrostrar responsabilidad penal en cabeza de una persona.

Respecto a las pruebas ofrecidas en el debate oral y frente a los alegatos de la defensa es evidente tal y como ella lo enuncia que la víctima no asertiva en su declaración (en donde no es relevante las preguntas confusas que quiso realizar la defensa frente a si conocía al acusado o querer distraer la atención del despacho indicando que no supo quien la atropelló) pero no por ello se deba minar su valor probatorio puesto que del mismo se deduce que el día de los hechos transitaba por el sector de la Carrera 17 con Calle 45 y que intentando cruzar la vía fue atropellada por el acusado, donde es evidente que su declaración de casi estar colocando su pie sobre el asfalto no obedece a la realidad puesto que del funcionario que realizó una reconstrucción del accidente de tránsito basado en el Informe de Accidente (del que dicho sea de paso si bien no se incorporó al debate oral, del mismo se realizó descubrimiento a la defensa, conocía el mismo y allí se plasmaron unas imágenes tomadas del original, del cual no existió oposición por parte de la defensa recordando que no existe tarifa legal en nuestro ordenamiento y hay libertad probatoria) y del mismo se puede apreciar que la peatón ya había empezado a cruzar la vía y que inclusive la posición de la huella de arrastre, inclinada hacia el andén, dejan ver que el impacto no ocurrió donde adujo la víctima, no obstante, se le indica la defensa que eso exonera de responsabilidad penal al encartado. Es evidente que el dicho de la víctima que observó que no transitaban carros no obedece a la realidad puesto que un

velocípedo como ya se esbozó “no sale de la nada” pero se advierte que en este caso existe el aporte de la víctima y el aporte del acusado al resultado luego existe responsabilidad penal.

Conforme a lo expuesto, y para responder al alegato de la defensa frente a la imprudencia de la víctima como único factor determinante en el resultado lesivo, veamos la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del Radicado No. 28441 del 2 de julio de 2008 donde señaló lo siguiente:

“El error del fallador de segundo grado consistió en haber hecho abstracción, para la solución de la problemática, del fenómeno jurídico de la concurrencia de riesgos en orden a adoptar una salida consecuente con la dogmática jurídico penal contemporánea.

Si bien el fallo evidencia un manejo adecuado de algunos conceptos de la doctrina de la imputación objetiva frente a los eventos de delitos imprudentes, tales como creación de riesgos jurídicamente desaprobados, elevación del riesgo permitido y realización del riesgo en el resultado, lo cierto es que, para dar solución correcta al caso específico, se dejó por fuera de análisis figuras igualmente importantes y de amplio desarrollo en la misma sistemática, con cuyo concurso la decisión hubiera sido diferente.

En efecto, es evidente que en este caso, desde el punto de vista de la causalidad material, el resultado muerte de la joven Jessica Lorena Araque Moreno se produjo en virtud de la concurrencia de dos riesgos jurídicamente desaprobados. Por una parte, la elevación del riesgo permitido con la conducta del procesado JORGE LUIS CÁRDENAS ROJAS quien, violando el deber objetivo de cuidado, traducido en el respeto a las reglamentaciones de tránsito rodado en carretera, decidió sobrepasar dos vehículos en curva y con prohibición de adelanto al estar demarcada la vía con doble línea amarilla continua.

Y, por otro lado, con la conducta de Camilo Roperó Mateus, conductor del vehículo motocicleta en el cual viajaba como parrillera la víctima, por no conservar la distancia exigida para los vehículos en carretera, omisión que impidió su reacción oportuna precipitando su colisión con el vehículo de servicio público que lo antecedía, la subsiguiente caída de su pasajera en plena vía y su inmediato arrollamiento precisamente por el tracto camión conducido por el procesado JORGE LUIS CÁRDENAS ROJAS.

El fenómeno de concurrencia de riesgos, o concausalidad, ha sido uno de los temas más complejos a través de la dogmática jurídico penal. De acuerdo con dicha figura, en la realización del resultado intervienen varios cursos lesivos, los cuales pueden ser producto de la acción de un tercero o por la propia víctima, esto último en especial cuando infringe sus deberes de auto protección⁴.

Frente a esa constelación de casos “existen supuestos en los que concurre, sin duda alguna, una conexión suficiente entre el riesgo inicial creado por el autor y el resultado final, y en los que esa conexión no se ve desvirtuada por una conducta de la víctima o una conducta de otro sujeto. En los supuestos en los que se trata de una conducta concurrente de otro sujeto, cuando son dos los riesgos que explican el resultado —cadena de imprudencias—, la solución es sencilla: se tratará de un supuesto de autoría accesoria, ambos sujetos responderán”⁵.

Si de conformidad con los lineamientos básicos de la teoría de la imputación objetiva —como viene de verse— o de otros esquemas dogmáticos bajo la óptica del instituto de la concausalidad, en caso de confluir varios cursos lesivos del bien jurídico de un tercero la solución está orientada hacia la responsabilidad conjunta de los autores, no parece apropiada, en principio, la salida adoptada en el presente caso por el Tribunal consistente en eximir de toda responsabilidad a JORGE LUIS CÁRDENAS ROJAS, salvo demostrarse que su conducta no tuvo conexión suficiente con el resultado producido.

En orden a establecer la conexidad entre el riesgo y el resultado producido, la teoría de la imputación objetiva ha diseñado mecanismos en la mayoría de las veces de gran utilidad para su determinación apelando a los denominados cursos causales

⁴ Cancio Melia, Manuel. Conducta de la víctima e imputación objetiva, págs. 280 y ss. RDPCr-2ª. Época, N° 2, 1998.

⁵ Cancio Melia, Manuel. Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva, pág. 119. Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza (Argentina). 1999.

hipotéticos, conforme a los cuales se asume que aún frente a un comportamiento diverso del autor la consecuencia en todo caso se hubiera producido, básicamente porque “un resultado no puede serle imputado al creador de un riesgo jurídicamente desaprobado si dicho resultado se hubiere producido incluso con una conducta diversa del autor”⁶, problemática que conduce a confrontar esta situación con la inevitabilidad del resultado”

De lo anterior, se puede colegir que se debe ser cauto al momento de estudio de cada caso concreto, puesto que si bien es cierto para nuestra controversia, la víctima debió tomar los respectivos resguardos para cruzar la calle, se debe apreciar que el actuar del acusado, según el estado de la vía que es recta, sin obstáculos y quien debía transitar a 30Km\h por dicha intersección, donde pudo apreciar que la víctima se abalanzó hacia la calle por lo que el punto de impacto y el sentido de la huella de arrastre, situación que de **tajo** cercena cualquier hecho imprevisto para el acusado puesto que pudo **actualizar** la trayectoria que desplegó el afectado mientras cruzaba la calle; por ello continuando con el análisis del referente jurisprudencial reseñado consideramos muy importante evocar lo que sigue advirtiendo la Sala de Casación Penal, donde era necesario ubicar en el contexto fáctico, los desaciertos en su análisis y la forma cómo se debe solucionar el mismo:

“ Descendiendo al caso de la especie, es necesario determinar, de cara a establecer un correcto juicio de imputación objetiva frente a la conducta desplegada por CÁRDENAS ROJAS, si prescindiendo de su conducta infractora de un deber objetivo de cuidado o suponiendo que su actuar hubiera sido respetuoso de las reglamentaciones de tránsito — es decir, si no hubiera realizado la maniobra imprudente de adelantar con el vehículo tracto camión que conducía otros vehículos de similares características en plena curva y con prohibición de sobrepaso por estar demarcada la vía con doble línea amarilla continua en ese sector— se hubiera desencadenado el suceso que dio al traste con la existencia de la joven Jessica Lorena Araque Moreno.

A diferencia de lo que sostiene el Tribunal, corporación para la cual la realización del resultado fue producto exclusivo de la conducta riesgosa desarrollada por el conductor de la motocicleta, esta Sala considera que marginando el comportamiento desplegado por CÁRDENAS ROJAS el resultado no se hubiera concretado, dicho de otro modo, la conducta imprudente de este individuo fue determinante para la muerte de Araque Moreno, así hubiera concurrido otro riesgo, como a la postre lo constituyó el accionar de Camilo Roperó Mateus, conductor de la motocicleta en la cual viajaba como parrillera la víctima, quien, como ya se ha dicho, no conservaba la distancia exigida por los reglamentos de tránsito rodado respecto del vehículo que le antecedió.

Por ese motivo, la Sala disiente radicalmente del criterio sentado por el Tribunal, según el cual el motivo determinante en la producción del resultado tan sólo lo constituyó el riesgo del mencionado Roperó Mateus, porque de haber conservado la distancia exigida por las disposiciones de tránsito con el automotor que le precedía, hubiera alcanzado a accionar el sistema de frenos, con lo cual no habría colisionado con ese vehículo ni su pasajera hubiera caído, con tal infortunio que precisamente el vehículo conducido por CÁRDENAS ROJAS la arrolló.”

Con todo lo expuesto se quiere demostrar que la responsabilidad obedece a un estudio serio en sede de imputación objetiva, donde sobra indicar que en algunos casos el actuar imprudente de la víctima es lo que produce el resultado y ello exonera de responsabilidad penal autor (siempre y cuando este hubiese actuado conforme el deber objetivo de cuidado), es por ello, no por capricho de este operador judicial; por el contrario en una construcción seria es que desde un punto de vista dogmático del delito imprudente y de la prueba legalmente constituida en Juicio Oral, es que indefectiblemente se debe emitir un fallo condenatorio, donde la prueba testimonial propia de la víctima y demás pruebas legalmente introducidas donde la afectado cruzando la calle fue atropellado por la motocicleta conducida por el acusado quien no realizó

⁶ Reyes Alvarado, Yesid. *Imputación objetiva*, pág. 218. Editorial Temis, Bogotá, 1994.

la maniobra tendiente a esquivar el peatón teniendo toda la visibilidad para hacerlo y por ello se aclara, la responsabilidad penal no se edifica por el dicho del funcionario que realizó la reconstrucción del accidente (porque la propia defensa, ello lo establece el Juez) o como lo alega la defensa que se debía dar por sentado que lo consignado por el agente de tránsito como la hipótesis del accidente debía ser tomada por el Juez para dirimir la presente controversia donde se le recuerda a la defensa nadie discute que la víctima se autopuso en peligro por su edad y no observar la vía al momento de cruzar, pero no por ello se zafa la responsabilidad penal del acusado puesto que el mismo también violó el deber objetivo de cuidado y en esa cadena de aportes se edifica la presente sentencia y se insiste a dicha conclusión se llega por propia fuerza probatoria de los testimonios recibidos en el Juicio Oral y en mayor medida la propia declaración la víctima y el funcionario que realizó la construcción del accidente de tránsito al narrar de forma clara como acaecieron los hechos.

La misma línea forjada por el despacho, incluso en unos hechos similares, radicado **CUI** 68.276.60.00.141.2009.00257 **N.I.** 45697 se emitió una condena el 13 de Febrero de 2017, que fue ratificada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Penal de esta ciudad, corroborando los anteriores lineamientos y bases para analizar la conducta imprudente

Por último se quiere rescatar y advertir en cuanto al régimen probatorio que pudiese existir una debilidad probatoria por no haberse introducido al debate oral el croquis del accidente de tránsito con el testimonio del funcionario de la Dirección de Tránsito y Transporte; es una premisa totalmente desacertada ya que se recuerda que no existe en nuestro sistema de enjuiciamiento una tarifa legal y que el delito imprudente para su demostración no requiere necesariamente de un croquis, y si bien es cierto un accidente de tránsito por regla general existe un croquis o levantamiento de la escena del accidente, entonces se pregunta el despacho si en los casos de los llamados “carros fantasmas” o donde el infractor abandona la escena de los hechos, su responsabilidad penal se desvanece simplemente por el hecho de no existir un croquis debidamente levantado, por lo cual la ausencia de croquis, no es determinante para el presente caso ya que existen testimonios y evidencias e inclusive la propia declaración del acusado que permiten deducir de forma clara y diáfana que el encartado infringió el deber objetivo de cuidado. Respecto a la ausencia de croquis refirió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

⁷“Es cierto que para dilucidar en forma más expedita el compromiso o la irresponsabilidad penal de JORGE ENRIQUE ARCINIEGAS CHACÓN habría sido de suma utilidad que se hubiera levantado un croquis en el lugar de los hechos, documento que como bien lo señala el ad quem “no se elaboró debido a que el camión y el cuerpo inerte de la occisa fueron movidos de la escena de los hechos”; no obstante, conviene rememorar que en la práctica judicial es muy frecuente en las investigaciones por delitos culposos (homicidios y lesiones) acaecidos en accidentes de tránsito que no se cuente con tan importante elemento de juicio, como ocurre con conductores en fuga o por la necesidad de trasladar a la víctima a un centro médico para brindarle oportuna asistencia, situaciones que si bien impiden la elaboración del correspondiente croquis, carecen de la virtud suficiente y determinante para imposibilitar la reconstrucción integral del suceso con apoyo en otros medios de convicción en punto de esclarecer la materialidad del punible y la responsabilidad penal.

⁷ Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de Mayo de 2015. Radicado No. 39233 M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz.

Entonces, incurre en error de derecho por falso juicio de convicción el funcionario que para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de un procesado exige la presencia del referido croquis, pues está creando una inexistente tarifa legal, contraria a la libertad probatoria reglada en el sistema penal colombiano, a partir de la cual es posible demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad penal con cualquier medio probatorio.”

En conclusión, la imputación jurídica u objetiva existe en el presente caso, por cuanto el encartado, como conductor debió amainar su velocidad (o realizar la respectiva maniobra adecuada) al momento de actualizar la presencia de los peatones en la vía, por lo cual desplegó una actividad riesgosa que fue más allá del arriesgo jurídicamente permitido o aprobado, entrando así en el terreno de lo jurídicamente desaprobado, y produjo un resultado lesivo, factores que se hallan indisolublemente ligados por un vínculo causal determinante y que se traduce en la falta al deber objetivo de cuidado en sede de Imputación Objetiva.

Como consecuencia de lo anterior, se puede colegir por las razones anteriormente expuestas y conforme a las pruebas examinadas, se ha de declarar suficientemente meritoria para condenar a **RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS** por el delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS** acorde con lo consagrado en el artículo 381 del C.P.P., toda vez que el acervo probatorio que fue debatido en el juicio oral, recaudado de manera legal, regular y oportuna produce en esta judicatura el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, exigido por el legislador procesal penal, esto es, que realmente el acá encartado vulneró sin justa causa efectivamente el interés jurídico tutelado por el legislador y es por ello que en aras del principio de lesividad del control social se está en presencia de una conducta reprochable que deviene como consecuencia lógica y jurídica la imposición de una pena como sujeto imputable que es, pena que además de ser necesaria, sea razonable y proporcional con la entidad del bien jurídico transgredido y que además debe cumplir con los fines de prevención general, reinserción social y protección al condenado, como lo estipula el Art. 4 del C.P.

CALIFICACIÓN JURÍDICA Y DOSIMETRIA PENAL

Los hechos demostrados se adecuan a la conducta de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS**, descrita en el libro segundo, parte especial Título I, Capítulo tercero, artículos 111, 112 inciso segundo, 113 inciso segundo y 114 inciso segundo, en concordancia con el art. 117 y 120 inciso primero y segundo del Estatuto Penal. Conforme la unidad punitiva del art. 117 del C.P., su condición es la de autor y se somete al siguiente margen punitivo:

Código Penal	límite mínimo legal	límite máximo legal
Art. 114 inciso 2	48 meses	144 meses -
Multa	34.66 smlmv	54 smlmv -
Art. 120	38 meses 12 días	108 meses
Multa	<u>27.728 smlmv</u>	<u>40.5 smlmv</u>
Pena	9 meses 18 días	36 meses
Multa	6.932 smlmv	13.5 smlmv

En donde,

	MÍNIMO		MEDIOS		MÁXIMO
	-----		-----		-----
Pena	9 m 18 d	16 m 6 d		29 m 12 d	36 meses
Multa	6.932 smlmv	8.574 smlmv		11.858 smlmv	13.5 smlmv
Privación Conducir	16 meses	25 m 15 d		44 m 15 d	54 meses

Determinado el ámbito punitivo de movilidad inciden en la dosificación de la pena las condiciones personales del autor frente a la conducta ejecutada verificándose que no obran y no se han imputado circunstancias de mayor punibilidad determinadas en al art. 58 del Estatuto Penal, por ende, se torna viable ubicar la pena a imponer en el cuarto mínimo y en él verificar el grado de injusto y culpabilidad bajo los criterios del inciso tercero del artículo 61 del C.P. En este orden de ideas, la conducta punible realizada por el encartado, es de total reproche puesto, además que este tipo de conductas imprudentes obedecen al afán y falta de fidelidad a las normas de tránsito, desde el punto de la necesidad de la pena y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en consonancia con la prevención general y prevención especial que debe comportar la pena, se impondrá la pena de **DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN** y multa de **SIETE (7) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** que deberá cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta del tesoro nacional.

Asimismo,1 se impondrá la prohibición de manejar vehículos automotores por un tiempo de **DIECIOCHO (18) MESES**.

Igualmente, se le condenará a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal conforme lo dispone el artículo 52 del C.P.

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena debe detenerse este despacho judicial y ponderar si es merecedor del presente subrogado teniendo en cuenta igualmente cuál es la norma que se debe aplicar en este caso, teniendo como marco la nueva reforma dispuesta por la ley 1709 de 2014, por lo que para el presente caso se concluye que es más benigna la nueva norma para los intereses del sentenciado en razón a que los requisitos son menos exigentes. El artículo 63 del C.P. modificado por la ley 1709 de 2014 establece:

- “Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena.** La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurren los siguientes requisitos:*
- 1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.*
 - 2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.*

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.....”

Así las cosas, se tiene que al carecer el ajusticiado de antecedentes penales y en atención que el delito de Lesiones Personales Culposas no está incluido en aquellos delitos descritos en el art. 68 A del C.P. de forma automática se debe proceder conforme se satisfacen los requisitos objetivos y entrar a conceder el subrogado sin hacer valoraciones de índole subjetiva, donde si bien es cierto este despacho anota que el delito es reprochable, este despacho judicial debe atender los nuevos mandatos legales y extender tal garantía al sentenciado. Por las anteriores consideraciones, suspenderá su ejecución por un período de prueba que se fija en **DOS AÑOS** previa prestación de caución prendaria que se fijará en la suma de **CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000)** la cual tendrá que ser cancelada en efectivo y no mediante póliza y suscripción de diligencia de compromiso en la que se obligue a cumplir con las exigencias del Art. 65 del C.P.

En firme la presente decisión, de conformidad con el art. 106 del C.P.P., la víctima podrá dar inicio al trámite del Incidente de Reparación Integral para reclamar los perjuicios ocasionados por la conducta punible dentro de un término de 30 días contados a partir de la firmeza de este fallo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA** con **FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR a RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 91.540.303 expedida en Bucaramanga, ciudad donde nació el 11 de Junio de 1985, hijo de Rodolfo y Diocelina, trabaja en oficios varios y residente en la Calle 73 No. 28 – 29 del Barrio San Pedro de Bucaramanga Santander, a la pena principal de **DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN** y multa de **SIETE (7) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** que deberá consignar a favor del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta del tesoro nacional, **Y LA PRIVACIÓN DEL DERECHO** a la conducción de vehículos automotores por el término de **DIECIECIOCHO (18) MESES** por ser hallado autor y responsable del delito de **LESIONES PERSONALES CULPOSAS**, en perjuicio de la integridad personal de Mercedes Palencia de Calderón, por hechos ocurridos en Bucaramanga el 20 de Octubre de 2013, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar expresadas en la motivación de este fallo.

SEGUNDO.- CONDENAR a RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS, a la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de Derechos y Funciones Públicas por un tiempo igual al de la pena principal.

TERCERO.- CONCEDER a RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS el subrogado de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena por un periodo de prueba de **DOS AÑOS**

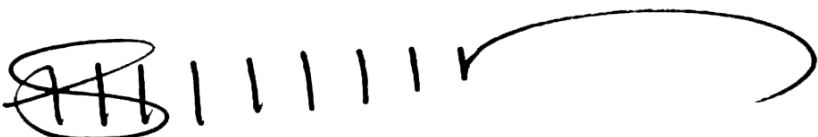
previa caución prenda por la suma de **CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000)** la cual deberá cancelar en dinero en efectivo y suscripción de diligencia de compromiso de conformidad con el art. 65 del C.P., por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

CUARTO.- En firme la presente decisión, de conformidad con el art. 106 del C.P.P., la víctima podrá dar inicio al trámite del Incidente de Reparación Integral para reclamar los perjuicios ocasionados por la conducta punible dentro de un término de 30 días contados a partir de la firmeza de este fallo.

QUINTO.- **DAR** aplicación a lo dispuesto en el Art. 166 del Código de Procedimiento Penal. Una vez ejecutoriada esta decisión remítase copia de lo actuado a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ® de la ciudad para la vigilancia de la pena impuesta en esta sentencia.

SEXTO.- Correr traslado por escrito a las partes de la presente decisión a través de correo electrónico, sobre la cual procede el recurso de apelación que se deberá sustentar dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con el art. 545 del C.P.P. adicionado por el art. 22 de la ley 1826 de 2017, recurso que se deberá enviar al correo electrónico **j01pmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co** del presente despacho judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by several vertical strokes and a long horizontal flourish.

CARLOS ENRIQUE SUÁREZ DELGADO
Juez

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
SALA DE DECISIÓN PENAL**

Magistrada Ponente: SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ

Radicación:	680016000159201381439 (21-150A)
Procedencia:	Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga.
Procesado:	Rodolfo Arciniegas Galvis.
Delito:	Lesiones personales culposas.
Apelación:	Sentencia condenatoria.
Decisión:	Decreta nulidad
Aprobado:	Acta No. 266
Fecha:	14 de abril de 2021
Lectura:	22 de abril de 2021

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, contra la sentencia del 03 de febrero de 2021 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, mediante la cual declaró penalmente responsable a RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS por el delito de lesiones personales culposas -Artículo 111, 112 inciso 2º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º, 117 y 120 del Código Penal-.

II. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Conforme se reseñó por la Fiscalía General de la Nación en el escrito de acusación¹, el día 20 de octubre de 2013 a las 10:35 a.m. la señora Mercedes Palencia de Calderón se desplazaba como transeúnte sobre la carrera 17 sentido Norte-sur de Bucaramanga, en

¹ Ver folios 165 a 177 de Carpeta digital.

zona demarcada para paso peatonal, cuando fue impactada por la motocicleta de placas VWR-98C conducida por el señor RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS, quien se desplazaba en sentido occidente oriente por la calle 45, generando como consecuencia lesiones en la integridad física de aquella.

El Instituto Nacional de Medicina Legal le dictaminó a la víctima una incapacidad definitiva de sesenta (60) días y secuelas médico legal consistentes en deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente.

III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

3.1. El 18 de abril de 2018 se llevó a cabo el traslado de escrito de acusación² conforme al procedimiento especial abreviado.

3.2. El 19 de abril de 2018 se asignó el conocimiento del asunto al Juzgado 01 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga.³

3.2. El 05 de marzo de 2019 se practicó audiencia concentrada⁴, en donde se adelantaron estipulaciones probatorias y se decretaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa.

3.3. La audiencia de juicio oral⁵ se instaló el día 08 de mayo de 2019 y se continuó en sesiones de 10 de julio de 2019, 11 de marzo de 2020 y 09 de diciembre de 2020⁶, en esta última se concluyó el debate probatorio, se escucharon los alegatos de conclusión, se emitió el sentido de fallo condenatorio y se dio traslado del art. 447 de C.P.P.

² Ver folios 159 a 163 de Carpeta.

³ Ver folio 156 de Carpeta digital.

⁴ Ver folio 129 a 132 de Carpeta digital.

⁵ Ver folio 125 de Carpeta digital.

⁶ Ver folio 38 Carpeta digital.

3.4. Finalmente el 03 de febrero de 2021 se profirió sentencia condenatoria, decisión contra la cual la Defensa interpuso recurso de apelación, petición motivo de esta instancia.

IV. EL FALLO DE PRIMER GRADO⁷

Inició el Juzgador realizando una síntesis de los hechos objeto de juzgamiento, la identificación e individualización del procesado, la actuación procesal relevante y los alegatos presentados por la Fiscalía y la defensa.

De esa manera, dio paso a las consideraciones advirtiendo que no es objeto de debate la plena identidad de ARCINIEGAS GALVIS por haber sido objeto de estipulación probatoria.

Continuó con un breve relato de las declaraciones ofrecidas en juicio oral, comenzando por la víctima, quien refirió que no recordaba muy bien los hechos ni el nombre de la persona denunciada, pero que sí tenía presente que fue atropellada y arrastrada por el acusado en una motocicleta en la carrera 17 con calle 45 aproximadamente a las 10:35 a.m. del día de marras, en el momento en que se encontraba sobre el separador esperando a que cambiara el semáforo para poder cruzar. Describió que sufrió lesiones en su pierna y brazo izquierdo y también en los riñones, por lo que le fueron practicadas dos cirugías.

Aclaró en contrainterrogatorio que el accidente ocurrió justo cuando estaba dando el primer paso para cruzar sobre la vía, debido a que el semáforo se encontraba en luz roja y que para la época contaba con 75 años de edad.

⁷ Ver folio 14 a 29 de Carpeta digital.

De igual manera el A quo escuchó el testimonio de la Dra. Diana Margarita Melo adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien valoró a la víctima y le determinó una incapacidad médico legal definitiva de 60 días y como secuelas deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación del órgano de la locomoción de carácter permanente.

En igual sentido rindió testimonio Edgar Guerrero Melo, perito experto en Automotores de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien realizó inspección a la motocicleta con placas VWL-98C y relacionó los daños en el manubrio, defensa, rin delantero, espejos y quien agregó que el sistema de frenos y llantas se encontraban en buen estado.

Por último, se hizo referencia al testigo Edgar Nova Layton, Intendente de la Policía y técnico en seguridad vial, quien realizó un informe de reconstrucción del accidente de tránsito, adujo en primer lugar que no existían elementos que impidieran la visibilidad; indicó los involucrados en el accidente y los puntos cardinales en los que se encontraban cada uno de ellos; que sobre la intercepción existen semáforos, separador, paso peatonal y está prohibido estacionar; expuso que tomando como referencia el informe de accidente de tránsito se realizó una ambientación digital del cual concluyó como hipótesis del percance la causal de cruzar sin observar y advirtió que en la zona no existe prelación del peatón; por último, esgrimió que existe un factor determinante atribuible al conductor y un factor contribuyente atribuible al peatón.

De esa manera, el Juzgador de primera instancia llegó a la conclusión que el encartado al momento de conducir el rodante, faltó al deber objetivo de cuidado al no realizar la maniobra orientada a evitar atropellar a la víctima que se encontraba sobre el separador y omitió disminuir la velocidad, pues la vía era una línea recta y se tenía

toda la visibilidad y panorámica para percatarse de la presencia de cualquier obstáculo en la vía, por lo tanto una eventual falta de previsión por parte de la señora Mercedes Palencia no puede desconocer la responsabilidad penal del procesado en el delito de lesiones personales culposas.

Advirtió a su vez que el deber objetivo de cuidado no le asiste únicamente a la víctima, debiendo ésta tener el cuidado suficiente al cruzar la vía, pues de sus manifestaciones se percibe esta circunstancia; no obstante, no por ello se deduce su culpa en el accidente, pues en el estudio de la imputación objetiva se deben cumplir los derroteros para establecer en cabeza de quién recae las lesiones ocasionadas.

Continuó indicando que no desconoce que la misma víctima se puso en auto peligro por su edad y cruzar sin observar, pero que ello no sustrae de responsabilidad penal al acusado puesto que él mismo también violó el deber objetivo de cuidado.

Por último, advirtió el togado de primera instancia, que el hecho que no haya ingresado al debate oral el croquis del accidente de tránsito no es determinante para el presente caso, pues recordó que no existe en nuestro sistema de enjuiciamiento una tarifa legal y en el delito imprudente no se requiere para su demostración dicha prueba, además que se cuenta con los testimonios y evidencias suficientes para deducir de forma clara que el encartado infringió el deber objetivo de cuidado.

De esa manera, coligió el A quo que el señor ARCINIEGAS GALVIS más allá de toda duda es responsable del delito de lesiones personales culposas, pues del acervo probatorio debatido en juicio oral se logró comprobar las lesiones y la responsabilidad penal del acusado en ellas.

Ahora, en punto de la dosificación de la pena, teniendo en cuenta la unidad punitiva del artículo 117 del C.P. y la participación del encartado como autor de la conducta de lesiones personales culposas, al no concurrir circunstancias de mayor punibilidad y verificado el grado del injusto y culpabilidad bajo los criterios del artículo 61 del C.P. el A quo determinó viable imponer la pena de DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN y multa de SIETE (7) SMLMV a ARCINIEGAS GALVIS.

Así mismo le impuso la prohibición de conducir vehículos automotores por un lapso de DIECIOCHO (18) MESES y la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena aflictiva.

En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena el Juzgador de primera instancia indicó que el sentenciado sí es merecedor del subrogado al satisfacer los requisitos objetivos. Por lo tanto decidió suspender la ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) años previa prestación de caución prendaria que se fijó por la suma de \$50.000, y suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.

V. DEL RECURSO.

5.1. Defensa técnica.⁸

En la oportunidad procesal pertinente la defensa técnica de ARCINIEGAS GALVIS solicitó revocar la determinación condenatoria para que se proceda a absolver a su representado.

⁸ Ver folios 6 a 9 de Carpeta digital.

Inició con un recuento de los hechos y de los aspectos en los que se basó el Juez de primera instancia para declarar la responsabilidad penal del procesado.

Continuó señalando que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al encartado, por las siguientes razones: Invoca en primer lugar que la víctima se auto puso en peligro, pues cuando decidió cruzar la vía el semáforo se encontraba en luz verde, en ese sentido la denunciante fue quien aumentó el riesgo permitido y fue aquello el nexo causal directo del accidente, pues si ella hubiese actuado con cautela y se hubiese abstenido de cruzar, el resultado no se hubiese producido.

Además, según la defensa también se comprobó la auto puesta en peligro, en tanto: 1. La señora Mercedes Palencia tenía el poder de decidir si asumía el riesgo al cruzar la vía con el semáforo en verde; 2. Es una persona responsable de sus actos, con plena conciencia y capacidad de discernir el riesgo que estaba asumiendo; 3. El procesado no se encontraba en posición de garante frente a la víctima.

Por lo tanto, mencionó la opugnadora que los argumentos del A quo en cuanto a la velocidad a más de 30 km/h y la ausencia de maniobra tendiente a evitar el accidente, no fueron suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado hubiese creado un peligro al bien jurídico protegido.

De esa manera, indicó que el actuar del encartado no fue el determinante para producir el resultando, en tanto Mercedes Palencia no actuó de acuerdo con las normas de tránsito que rigen para los peatones, por lo tanto no hubo causalidad física o material entre la acción desplegada por el procesado y el resultado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Sobre la competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 906 de 2004⁹, este Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, contra el fallo condenatorio del 03 de febrero de 2021 proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga.

Bajo esa premisa, estudiará la Sala la impugnación propuesta, aclarando que, por tratarse de la segunda instancia, la competencia está restringida a los aspectos objeto de inconformidad y a los que resulten inescindiblemente ligados a los mismos, en virtud del principio de limitación.

6.2. Anotación previa.

En el recurso de apelación, sustentado dentro del término, la defensora del señor ARCINIEGAS GALVIS solicitó se le reconociera personería jurídica para actuar como tal, allegando poder de sustitución y certificación de miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomas.

Siendo así, se le reconocerá personería jurídica a la estudiante Laura Isabella Páez Avendaño, identificada con C.C No. 1.094.582.290 y Código Universitario 2170119, para actuar como defensora del acusado.

6.3. Del caso en concreto.

⁹ Artículo 34. De los Tribunales Superiores de Distrito. Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.

6.3.1. Nulidad.

Pues bien, sería del caso entrar a estudiar el fondo del asunto, en relación con lo alegado por el recurrente, si no se advirtiera la configuración de una causal de nulidad que obliga a la invalidación del trámite, ello a la luz de lo reglado por el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, en tanto la irregularidad advertida aflora lesiva del derecho constitucional al debido proceso, pues la Fiscalía desconoció la aplicación del principio de congruencia y su consecuente deber de estructurar de forma adecuada los hechos jurídicamente relevantes desde la formulación de imputación.

Con tal propósito, debe recordarse que del postulado de predeterminación de las reglas procesales emerge la doble estructura, formal y conceptual, que gobierna el proceso penal. La primera se relaciona con el principio antecedente-consecuente, entendido como la secuencia lógico-jurídica integrada, gradual y sucesiva de actos jurisdiccionales con carácter preclusivo regulados en la ley adjetiva; mientras que la estructura conceptual se refiere a la definición progresiva y vinculante del objeto del proceso penal en función, en concreto, de la determinación de la conducta punible y la responsabilidad del acusado¹⁰.

De ahí que, en virtud de tales axiomas, el Estado, a través de la reglamentación legal, debe asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, que una acción procesal siga lógica y coherentemente a otra y que la sentencia sea el resultado de la rigurosa observación de pasos y formas tendientes a garantizar a los sujetos la demostración de sus derechos y pretensiones y a la jurisdicción la posibilidad de comprobar plenamente los aspectos subjetivos y objetivos de la infracción, admitiendo en el curso de la

¹⁰ CSJ SP, 30 may. 2012, Rad. 38243; SP-10400, 5 ago. 2014, Rad. 42495

actuación solamente los actos propios de ella y dentro de los plazos establecidos por la norma. En esa medida, la transgresión de la estructura del debido proceso se verifica con la pretermisión de algún acto procesal expresamente señalado por la Ley como requisito antecedente para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin el cumplimiento de los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia¹¹.

Dicho ello y en orden a revelar la referida irregularidad advertida por la Sala, es menester recapitular que el principio de congruencia implica la existencia de consonancia entre la imputación, acusación y la sentencia, es decir, que el “acusado no puede ser declarado culpable y condenado por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena” (art. 448 del C. de P. P.), lo que supone que desde la imputación y luego en la acusación se debe precisar los aspectos fácticos y jurídicos de la conducta punible que se atribuye para lo cual se debe señalar la respectiva calificación jurídica.

Ahora bien, en el marco jurisprudencial, de cara a tal postulado, se tiene lo que sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional¹², en los siguientes términos:

[D]e conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de aplicación del principio de congruencia en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la acusación y la sentencia; (ii) su aplicación se extiende al vínculo existente entre la audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la acusación; (iii) de allí que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoración jurídica de los hechos deba permanecer incólume, precisamente por el

¹¹ CSJ, SP, sent., 23 de septiembre de 2015, Radic. SP12848-2015 (40694), MP Patricia Salazar Cuéllar

¹² Sentencia C-025/2010, del 27 de enero de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, CConst, SP.

carácter progresivo que ofrece el proceso penal. En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada por la Fiscalía durante la fase de instrucción, es posible, al momento de formular la acusación, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, eventualmente, modificar, dentro de unos parámetros racionales, la calificación jurídica de los hechos.”

Por su parte, la Sala Penal del a Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento¹³ desarrolló tal postulado así:

“(…) No se duda de la importancia total que comporta el principio de congruencia, en cuanto, manifestación necesaria del debido proceso y sus correlatos derechos de defensa y contradicción, en el entendido que para la parte acusada se hace necesario, no solo conocer los cargos por los cuales se convoca a juicio, sino defenderse adecuadamente de los mismos, en seguimiento de lo que sobre el particular consignan los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; por cuya consecuencia, además, resulta contrario a dichas garantías que se le condene por algo diferente al objeto de controversia.”

No se discute, así mismo, que la dicha congruencia opera en los planos fáctico, jurídico y personal¹⁴, para de ello significar que se trata de que el fallo coincida con la acusación, en principio, respecto de la identificación del condenado, la descripción fáctica de los hechos jurídicamente relevantes y su denominación jurídica.

De manera contraria, ya ha sido acuñado pacíficamente que la descripción fáctica – o hechos jurídicamente relevantes, como así lo rotula la Ley 906 de 2004-, no puede ser objeto de modificación sustancial a lo largo del proceso, entendido éste como el trámite formalizado que comienza con la formulación de imputación y termina con la sentencia ejecutoriada.

¹³ CSJ, SPP, sentencia SP4792-2018, Radicado 52507. MP Patricia Salazar Cuéllar. En similar sentido, entre otras, SP603-2018, SP1326-2018, SP3633-2018, SP-4167-20189, AP2196-2018 y AP3547-2018, CSJ, SP.

¹⁴ Radicado 10868, del 19 de julio de 2001, CSJ, SP.

Pero, además, la Corte ha detallado que la obligación de conservar el núcleo central del apartado fáctico opera desde la formulación de imputación, esto es, que dicha delimitación se torna invariable a partir de este hito procesal, hasta que es emitida la sentencia, lo que reclama concluir que cualquier desarmonía sustancial entre estos estados -imputación, acusación y sentencia- resulta violatoria del debido proceso.

Ahora bien, si se entiende que el principio de congruencia comporta dos aristas básicas: (i) derecho a conocer de manera clara y suficiente los cargos por los cuales se acusa a la persona; y (ii) concordancia entre los cargos consignados en la acusación y aquellos objeto de sentencia -absoluta en lo fáctico, relativa en lo jurídico-; es dable concluir que la violación del principio puede obedecer a una fuente distinta y, desde luego, ocasionar un daño diferente.

A este efecto, la Sala debe resaltar el carácter estructural de los hechos jurídicamente relevantes, pues, no solo representan una garantía de defensa para el imputado o acusado, en el entendido que éste debe conocer por qué se le está investigando o es llamado a juicio, sino que en razón a su carácter inmutable, se erigen en bastión insustituible de las audiencias de formulación de imputación y acusación, de cara al soporte fáctico del fallo.

En otras palabras, cuando el numeral segundo del artículo 288 de la Ley 906 de 2004, advierte que dentro de la imputación se ofrece obligatorio para el Fiscal efectuar una “Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible”; y, a su turno, el artículo 337 ibídem, reitera que la acusación debe consignar este mismo tópico; no solamente está referenciando una garantía para el procesado, sino que verifica inconcuso un elemento consustancial a dichas diligencias, a la

manera de entender que sin el requisito en cuestión el acto procesal se despoja de su esencia y deviene, en consecuencia, nulo.

Así las cosas, es claro que los hechos acusados no podrán sufrir ninguna alteración desde la imputación a medida que avanzan las diferentes etapas procesales, en otras palabras, siempre deberá existir una identidad entre los que son objeto de imputación, luego de acusación y finalmente, de ser el caso, de reproche penal, por lo que, ante tal garantía, se exige a la Fiscalía un ejercicio acucioso que derive en la adecuada elaboración de los *hechos jurídicamente relevantes* en los que soportará la convocatoria que hace a un ciudadano de responder penalmente por una conducta desplegada.

Es por ello que destaca tal actuación de la Fiscalía como una etapa sustancial del proceso penal, pues a partir de allí, de la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, es que se permite el correcto ejercicio de diferentes garantías fundamentales, entre ellas, esencialmente el derecho a la defensa del procesado, pues al conocer oportunamente la situación fáctica atribuida, es que aquél puede establecer la estrategia que desplegará su defensa en aras de desvirtuar lo acusado durante el desarrollo del juicio oral o, si así lo considera, aceptar su responsabilidad con los consecuentes beneficios punitivos establecidos.

Así las cosas, sin posibilidad de duda, la consecuencia natural de una equívoca imputación de la situación fáctica, o de su variación sustancial durante el desarrollo del proceso penal, en lo que trata sobre los hechos jurídicamente relevantes, es la nulidad de lo actuado, extremo procesal al que se deberá acudir en atención a que dicha irregularidad no puede ser objeto de convalidación en ninguna etapa procesal y, por el contrario, sus efectos perjudiciales irradiarían hasta la sentencia, encontrándose el Juez forzado a retrotraer la actuación

con el fin de subsanar tal irregularidad y así restablecer el eficaz ejercicio de las prerrogativas fundamentales del procesado.

“Con todo, eso no significa que una acusación con imprecisión de los hechos jurídicamente relevantes no tenga consecuencias en la construcción de la respuesta judicial. En efecto, la CSJ en fallo SP, del 8 de marzo de 2017, Rad. 44599 hizo una aguda reflexión sobre el punto. En dicha decisión destacó “la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la Nación de precisar cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo modelo normativo, lo que implica definir las circunstancias de tiempo y lugar, la conducta (acción u omisión) que se le endilga al procesado; los elementos estructurales del tipo penal, etcétera.”, las implicaciones de precisar el hecho jurídicamente relevante en el tema probatorio (en la solicitud y sustentación, en el examen de conducencia y pertinencia y en la apreciación de las mismas), y en la relación de congruencia entre acusación y sentencia, entre otros asuntos nucleares del proceso (CSJ SP del 18 de marzo de 2016, Rad.45266).”

En posterior pronunciamiento¹⁵, acentuó la relación que existe entre la situación fáctica con la garantía al debido proceso y la imposibilidad de acudir al análisis de las bases probatorias –luego de practicadas en el juicio oral- para extraer la situación fáctica relevante y subsanar el yerro en el que hubiese incurrido el ente acusador. Al respecto señaló que:

“Desde luego, si tanto la formulación de imputación, como la de acusación, en lo material y formal son erigidas en calidad de escenarios naturales, dentro de la estructura procesal diseñada por la Ley 906 de 2004, para comunicar al imputado o acusado, respectivamente, los hechos jurídicamente relevantes, mal puede decirse que la ausencia total de definición de este aspecto basilar puede suplirse con el conocimiento al cual puedan llegar aquellos por otros medios, dado que, así pudiera encontrarse esa información en dichos elementos, y así se permita advertir suplidas las deficiencias respecto de los derechos de defensa y contradicción, ello no elimina la circunstancia cierta de que el acto

¹⁵ CSJ, SP4792-2018, Rad. 52507 del 7 de noviembre de 2018.

procesal no cumplió con su función primordial, en clara e insubsanable vulneración del debido proceso.”

Allí mismo, desarrolló el concepto de “hechos jurídicamente relevantes” así:

En otras palabras, cuando el numeral segundo del artículo 288 de la Ley 906 de 2004, advierte que dentro de la imputación se ofrece obligatorio para el Fiscal efectuar una "Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible y, a su turno, el artículo 337 ibídem, reitera que la acusación debe consignar este mismo tópico; no solamente está referenciando una garantía para el procesado, sino que verifica inconcuso un elemento consustancial a dichas diligencias, a la manera de entender que sin el requisito en cuestión el acto procesal se despoja de su esencia y deviene, en consecuencia, nulo.

Ello se entiende mejor al examinar la naturaleza y finalidades de ambos institutos procesales, en tanto, si se considera que la imputación emerge como el acto comunicacional a través del cual el Fiscal informa al imputado los hechos por los cuales lo investiga; y, a su turno, la acusación representa el momento en el que ese funcionario formula cargos al procesado, de manera que solo en torno de estos puede girar el juicio, elemental surge que consustancial a ambos trámites se erige la definición de cuáles son, de manera clara y completa, los hechos o cargos que los gobiernan.

Entonces, si la imputación y la acusación no contienen de forma suficiente ese elemento toral, apenas puede concluirse que no cumplió con su cometido y, así, el debido proceso en toda su extensión ha sido afectado, reclamando de condigna invalidez, única forma de restañar el daño causado en el asunto que se examina.

Al hilo de lo expuesto se tiene que el desconocimiento de dicho postulado lógicamente afecta el debido proceso por vulneración de la estructura básica del trámite, y el derecho a la defensa, por cuanto que al efectuarse en la sentencia imputaciones fácticas y jurídicas respecto de las cuales no se ha ejercido el derecho de controversia, se estaría sorprendiendo al sujeto pasivo de la acción penal.

Ahora, en el caso en concreto se tiene que conforme al procedimiento especial abreviado, el traslado del escrito de acusación equivale a la formulación de imputación para todos los efectos procesales, según el parágrafo 4 del artículo 536 del C.P.P.

Y en ese orden de ideas, el 18 de abril de 2018 se llevó a cabo dicho acto procesal, en donde el representante del ente acusador estructuró la situación fáctica así:

“El 20 de octubre de 2013 a las 10:35 AM horas en vía pública, ocurre accidente de tránsito en la calle 45 con carrera 17 de Bucaramanga, cuando la señora MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN se desplazaba como peatón en la carrera 17 sentido norte-sur, en zona demarcada para paso peatonal, siendo impactada por la motocicleta de placas VWR98C conducida por el señor RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS, quien se desplazaba por la calle 45 en sentido occidente-orienté, generando como consecuencias lesiones en la integridad física de la peatón.

(...)

El señor RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS actuó de manera culposa, ocasionó lesiones en la integridad personal de la víctima, al omitir el deber objetivo de cuidado y diligencia de debía tener al momento de ejercer una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, ya que transitaba por la calle 45 y en la intersección de carrera 17 no tuvo la precaución que por la zona demarcada como zona peatonal transitaba la señora MERCEDES PALENCIA DE CALDERÓN, siendo su comportamiento negligente, imprudente, pues no detuvo la marcha ante la presencia de la peatón, por lo cual era previsible el resultado, ya que aumentó el riesgo jurídicamente permitido al omitir las normas de tránsito, máximo que incluso ese día no contaba con SOAT vigente.”

Del relato fáctico expuesto por el representante de la Fiscalía, se advierte de entrada una descripción genérica en la que no se precisa en concreto, cuál fue la omisión al deber objetivo de cuidado en que incurrió el conductor de la motocicleta, pues únicamente refirió que el acusado *no detuvo la marcha ante la presencia de la peatón*, pero no hizo ninguna referencia ni conexión con la norma o normas de tránsito que se transgredieron, solo se remitió a mencionar que *aumentó el riesgo jurídicamente permitido al omitir las normas de tránsito*, sin concluir cuáles; de igual manera indicó que el encartado no tuvo precaución al manejar, pero no hace ni siquiera mención de las prevenciones que tuvo que observar el conductor el día de marras para que no se produjera el resultado lesivo; por ejemplo, no referenció si el señor ARCINIEGAS GALVIS tenía que tener la precaución de disminuir la velocidad, de tener en cuenta las señales de tránsito (mencionarlas), de esquivar a la víctima, de transitar a cierta distancia del andén o separador, de tener en cuenta la precaución debida pues se trataba de una intersección vial; etc. nada de eso lo mencionó.

Por lo tanto para esta Colegiatura los hechos son inconclusos y omisivos, en cuanto van dirigidos a no dar mayor información del supuesto actuar imprudente del encartado y de su falta al deber objetivo de cuidado provocativo de las lesiones sobre la humanidad de la víctima. Dicha información debía hacerse pública al acusado y a la defensa de manera completa y clara, en aras de no vulnerar el derecho a la defensa, pues la Fiscalía era conocedora de toda la información, en tanto se supone que ya había superado la etapa de investigación y contaba con los elementos materiales probatorios que haría valer en juicio oral, máxime cuando el ente acusador no realizó ninguna modificación al escrito de acusación en la audiencia concentrada.

Pues bien, tales indeterminaciones conllevaron, además de lo anteriormente reseñado, a diferentes contrariedades entre el escrito

de acusación y los alegatos de apertura y de conclusión, pues la Fiscal alegó lo siguiente:

*“Si bien es cierto la señora Mercedes Palencia de Calderón es una persona de la tercera edad, para la época de los hechos ella era una persona enérgica que se dedicaba a la venta de productos de catálogo, transitaba habitualmente por ese sitio dadas sus labores, y para el momento de los hechos ella estaba cumpliendo con todos deberes de un peatón, **transitando por la cebra**, por la esquina (...) es el motociclistas quien faltó al deber objetivo de cuidado (...) pues es el motociclista quien tiene mayor capacidad de maniobrabilidad al conducir la motocicleta dado su espesor pequeño, se puede evitar, es decir, no hubo ninguna maniobra para evitar el accidente que pudo haber evitado, **como quiera que él para ese momento estaba invadiendo el paso peatonal.**”¹⁶*

Y en sus alegatos de cierre, refirió lo siguiente:

*“Ella estaba en el separado dispuesta a atravesar la calzada sentido vehicular occidente-oriente con el autocuidado, **en el separador esperando a poder transitar** y es en ese momento su señoría cuando sorpresivamente pasa la motocicleta y prácticamente se la lleva, porque el motociclista se enreda con el bolso de ella, la arrastra y la hace volar”¹⁷.*

Por el contrario, en el escrito de acusación mencionó que la víctima estaba transitando por la zona demarcada para peatones, se desplazaba como peatón en la carrera 17 sentido norte-sur, en zona demarcada para paso peatonal, y nunca refirió en la acusación, que ésta se encontraba en el separador esperando a poder transitar y que

¹⁶ CD juicio oral 8 de mayo de 2019, récord: 00:05:43 a 00:07:30.

¹⁷ CD juicio oral 9 de diciembre de 2020 récord: 00:20:00 a 00:20:50.

fue en esa posición donde ocurrió el accidente, como sí lo hizo en los alegatos de cierre.

Véase también, la contrariedad y disimilitud entre los hechos indicados en ambos alegatos, pues en los iniciales advierte que la víctima transitaba por la cebra y que el encartado invadió esta zona demarcada para peatones; mientras que en los finales puntualizó que la señora Mercedes se encontraba en el separador y el procesado pasó muy cerca a ella, a tal punto, de arrastrarla con la motocicleta.

Además, en los alegatos de conclusión la Fiscalía hizo mención sobre hechos objeto de debate de juicio oral como: La velocidad superior a los 30 km/h, que el acusado conducía muy cerca al separador y que la señora Mercedes Palencia se encontraba esperando sobre el mismo, sucesos que no fueron consignados en el escrito de acusación.

Por lo tanto, la omisión por parte de la Fiscalía de estructurar los hechos jurídicamente relevantes lesiona el derecho fundamental al debido proceso y, en mayor medida, al derecho de defensa, pues el procesado, en este caso, desconoce tales circunstancias fácticas que se requieren para la configuración del punible a él endilgado, lo que deriva en la imposibilidad de establecer una estrategia defensiva, ello al desconocer qué debe refutar o de qué se debe defender.

Las consecuencias de lo anterior se pueden ver reflejadas en los hechos probados declarados en la sentencia de primer instancia, en donde el Juzgador si bien hizo mención de la omisión del conductor al no detener la marcha ante la presencia del peatón, como se consignó en el escrito de acusación, también hizo referencia a otras circunstancias que únicamente fueron referidas en las alegaciones de conclusión por parte del ente acusador y no en la acusación, como por ejemplo: que la señora Mercedes Palencia se encontraba en el

separador y cuando fue a dar el primer paso se generó el impacto con la motocicleta¹⁸; que la falta al deber objetivo de cuidado se ocasionó por *no haberse realizado la maniobra tendiente a evitar atropellar a la víctima*, pero al igual que en el escrito de acusación no se mencionó cuál norma se infringió; la falta de previsión del acusado, pues tenía todas las condiciones para haber advertido cualquier obstáculo en la vía; y por último se infiere que la velocidad del procesado era mayor a 30km/h y no la redujo.

De esa manera, la incongruencia desde el escrito de acusación, pasando por los alegatos y terminando en la sentencia de primera instancia, conlleva a dar aplicación del extremo procesal de la nulidad, al contrastar dichas intervenciones con el marco normativo y jurisprudencial antes visto, por cuanto es claro el detrimento de las garantías procesales del encartado, al no cumplirse con los parámetros propios de una debida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, los cuales conlleva -se insiste- al impedimento del correcto ejercicio del derecho de defensa o del Juez en determinar el tema a probar en el desarrollo del juicio oral, entre otros.

De tal modo, como se está en presencia de un defecto sustancial que afecta garantías fundamentales, lo procedente es decretar la nulidad de lo actuado, a partir, inclusive del traslado del escrito de acusación, para que se corrija por parte de la Fiscalía el apartado de hechos jurídicamente relevantes, precisando de manera clara y detallada el deber objetivo de cuidado al que faltó el procesado con las

¹⁸ Se advierte que en la mismas consideraciones existe una contrariedad por parte del A quo, pues en primer lugar el Togado llegó a la conclusión de que la víctima estaba sobre el separador, al referir: *“se omitió disminuir la velocidad o realizar la maniobra tendiente a esquivar a la víctima que se hallaba sobre el separador”* y después afirmó que la peatón no pudo haber estado en el separador sino que ya había iniciado la marcha sobre la zona demarcada para paso peatonal y fue ahí donde se originó el accidente, al referir: *“se puede apreciar que la peatón ya había empezado a cruzar la vía y que inclusive la posición de la huella de arrastre, inclinada hacia el andén, dejan ver que el impacto no ocurrió donde adujo la víctima”*.

respectivas normas infringidas, que dio como resultado el accidente de tránsito, si así lo considera.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

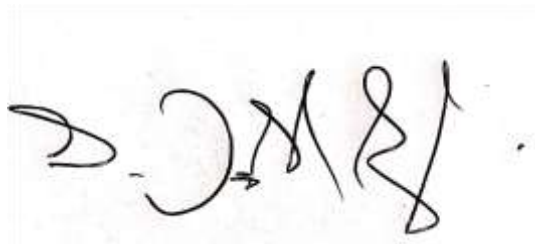
RESUELVE:

PRIMERO. DECRETAR LA NULIDAD de la actuación procesal, a partir –inclusive- del traslado del escrito de acusación, con el fin de que se retrotraiga el trámite y se adopte la decisión que corresponda, en los términos antes indicados.

SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica a la estudiante Laura Isabella Páez Avendaño, identificada con C.C No. 1.094.582.290 y Código Universitario 2170119, para actuar como defensora del acusado.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ

Magistrada



Radicación: 680016000159201381439 (64.839)

Procesado: RODOLFO ARCINIEGAS GALVIS.

Delito: Lesiones personales culposas.

GUILLERMO ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOSA

Magistrado



MARÍA STELLA JARA GUTIÉRREZ

Magistrada